



# Asamblea General

Distr. general  
14 de mayo de 2021  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos

47º período de sesiones

21 de junio a 9 de julio de 2021

Tema 2 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina  
del Alto Comisionado y del Secretario General**

## Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán

### Informe del Secretario General\*

#### *Resumen*

Este informe se presenta de conformidad con la resolución 75/191 de la Asamblea General, en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que presentara un informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán al Consejo de Derechos Humanos en su 47º período de sesiones. Contiene información sobre las pautas y tendencias al respecto, los avances logrados respecto del cumplimiento de la resolución 75/191 y recomendaciones para mejorar su aplicación.

\* Se acordó publicar este informe después de la fecha de publicación prevista debido a circunstancias ajenas a la voluntad de quien lo presenta.



## I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 75/191 de la Asamblea General, en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que presentara un informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán al Consejo de Derechos Humanos en su 47º período de sesiones. Abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 17 de marzo de 2021.

2. El presente informe contiene información del Gobierno de la República Islámica del Irán y de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y personas entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). También se basa en las observaciones de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Gobierno de la República Islámica del Irán ha seguido colaborando con el ACNUDH y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas durante el período que abarca el informe. El Secretario General agradece los comentarios detallados presentados por el Gobierno en respuesta al proyecto de informe.

3. La situación general de los derechos humanos en la República Islámica del Irán sigue siendo muy preocupante. Además de la crisis económica, agravada por la imposición de sanciones sectoriales y la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), los factores internos que ponen trabas al estado de derecho y debilitan los mecanismos de justicia y de rendición de cuentas propician la impunidad, perpetúan las violaciones existentes y aumentan el riesgo de futuras violaciones. La falta de establecimiento de un mecanismo acorde con el derecho internacional para la rendición de cuentas y la reparación de las violaciones cometidas en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 es emblemática. Los manifestantes, los defensores de los derechos humanos, los abogados y los actores de la sociedad civil siguen expuestos a actos de intimidación, detención arbitraria y actuaciones penales, incluida la pena de muerte.

## II. Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán

### A. Pena de muerte y privación arbitraria de la vida

4. Sigue siendo motivo de gran preocupación la privación arbitraria de la vida, entre otras cosas por imposición de la pena de muerte en formas que vulneran el derecho internacional de los derechos humanos, por el uso letal de la fuerza por parte de los agentes del Estado y como resultado de la privación de atención médica durante la reclusión. Según el Comité de Derechos Humanos, la falta de sometimiento a la justicia de los autores de actos de privación arbitraria del derecho a la vida puede de por sí constituir una violación separada del derecho a la vida<sup>1</sup>.

#### 1. Aplicación de la pena de muerte

5. El Secretario General reitera su preocupación por el elevado número de condenas a pena de muerte y ejecuciones, la inclusión en la legislación iraní de la pena capital en relación con una serie de actos, la imposición de la pena de muerte en contravención de las normas sobre el derecho a un juicio con las debidas garantías y la falta de datos oficiales sobre las ejecuciones<sup>2</sup>. En 2020, al menos 267 personas, entre ellas 9 mujeres, fueron ejecutadas<sup>3</sup>. Las autoridades anunciaron 91 ejecuciones. Al menos 25 de ellas tuvieron lugar por delitos relacionados con las drogas, 1 por consumo de alcohol y al menos 15 por delitos excesivamente amplios de *moharebeh* (emplear armas para arrebatar vidas o propiedades o para sembrar el terror entre la población), *fasad* (sedición contra el poder constituido) y *baghy* (rebelión contra el Estado). En 2020, las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas se mantuvieron en el mismo nivel que en los dos años anteriores. En los dos primeros meses

<sup>1</sup> Observación general núm. 31 (2004), párr. 18.

<sup>2</sup> Véase [https://iranhr.net/media/files/Rapport\\_iran\\_2021-gb-290321-BD.pdf](https://iranhr.net/media/files/Rapport_iran_2021-gb-290321-BD.pdf).

<sup>3</sup> *Ibid.*

de 2021, al menos 12 personas, en su mayoría pertenecientes a grupos minoritarios, fueron ejecutadas por ese tipo de cargos<sup>4</sup>. El Gobierno ha afirmado que la pena de muerte se aplica respetando plenamente las normas sobre el derecho a un juicio con las debidas garantías y con total transparencia.

6. En 2020, al menos 69 personas de la minoría kurda fueron ejecutadas<sup>5</sup>. El Tribunal Supremo confirmó las condenas a muerte de 10 presos políticos kurdos acusados de “actuar contra la seguridad nacional”, *fasad*, *moharebeh* y “pertenencia a grupos salafistas”. Muchas personas de la minoría árabe permanecen en el corredor de la muerte o son víctimas de desaparición forzada tras su detención. Ali Khasraji, Hossein Silawi y Naser Khafajian fueron ejecutados en secreto el 28 de febrero de 2021<sup>6</sup>. El evidente aumento de las ejecuciones de miembros de minorías, en particular de la minoría baluchi, es alarmante. Entre el 19 de diciembre de 2020 y el 1 de febrero de 2021, al menos 21 presos baluchi han sido ejecutados. Un caso representativo es la ejecución de Javid Dehghan, condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario de Zahedan por *moharebeh*, a pesar de las denuncias de confesión forzada bajo tortura. Fue ejecutado el 30 de enero de 2021, pese a los llamamientos del ACNUDH para detener la ejecución<sup>7</sup>.

7. Se sigue imponiendo la pena de muerte a los manifestantes. En 2020, al menos dos manifestantes fueron ejecutados y ocho tienen casos de pena de muerte activos. Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi fueron condenados a muerte en relación con las protestas de noviembre de 2019. En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo aceptó su petición de celebración de un nuevo juicio<sup>8</sup>. En julio de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte de Mehdi Salehi Ghaleh Shahrokhi, Mohammad Bastami, Majid Nazari Kondari, Hadi Kiani y Abbas Mohammadi en relación con las protestas de 2017 y 2018<sup>9</sup>. El Secretario General observa con preocupación la formulación de acusaciones de asesinato sin fundamento contra los manifestantes para justificar la pena de muerte. Entre los casos emblemáticos figuran la ejecución de Mostafa Salehi y Navid Afkari el 5 de agosto y el 12 de septiembre de 2020, a pesar de las protestas mundiales. Fueron detenidos tras su participación en las protestas de 2017 y 2018 y de 2019, respectivamente. Ambos se enfrentaban a cargos infundados de asesinato y *moharebeh*, y al parecer fueron sometidos a tortura para obtener su confesión, que posteriormente se utilizó como prueba en juicios en los que no se respetaron las debidas garantías. Salehi permaneció en régimen de aislamiento durante más de un año<sup>10</sup>.

8. Además de la imposición de la pena de muerte por el ejercicio del derecho de reunión pacífica, al Secretario General le preocupa su imposición por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ruhollah Zam, fundador de AmadNews, un sitio web y canal de Telegram, fue ejecutado el 12 de diciembre de 2020. Fue condenado en junio de 2020 por *fasad*, entre otros delitos, basándose en parte en una confesión forzada<sup>11</sup>.

## 2. Ejecución de jóvenes infractores

9. El Secretario General ha pedido sistemáticamente que se ponga fin a la ejecución de jóvenes infractores<sup>12</sup>. En virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la República Islámica del Irán, está absolutamente prohibido ejecutar a personas que fueran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito<sup>13</sup>. El Código Penal Islámico mantiene la edad mínima de responsabilidad penal en 9 años lunares para las

<sup>4</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* Véase también [www.amnesty.org/download/Documents/MDE1338642021SPANISH.pdf](http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1338642021SPANISH.pdf).

<sup>7</sup> Véase [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26716](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26716).

<sup>8</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.reuters.com/article/uk-iran-death-sentence-retrial-idUSKBN28F0BO](http://www.reuters.com/article/uk-iran-death-sentence-retrial-idUSKBN28F0BO).

<sup>9</sup> *Ibid.* Véase también <https://iranhr.net/en/articles/4350/>.

<sup>10</sup> *Ibid.* Véase también <https://iranhr.net/en/articles/4369/>.

<sup>11</sup> Véase <https://cpj.org/data/people/roohollah-zam/> y [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26603&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26603&LangID=E).

<sup>12</sup> Por ejemplo, A/75/287, párr. 61, y A/HRC/43/20, párr. 66.

<sup>13</sup> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6, y la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37.

niñas y 15 años lunares para los niños en los casos en los que el niño es condenado por delitos castigados con el talión o delitos *hudud* (para los que se establecen penas obligatorias y fijas). Aunque el artículo 91 del Código Penal islámico otorga a los jueces la facultad de eximir a los niños de la pena de muerte, la persistente imposición de la pena de muerte a jóvenes infractores pone de manifiesto que ese artículo no ha surtido efecto. Algunos jóvenes infractores pasan más de un decenio esperando su ejecución, lo que les provoca una gran angustia. El Gobierno ha destacado la política general de las autoridades de fomentar la reconciliación y proporcionar ayudas económicas para el pago de la composición (*diya*) y las diversas entidades institucionales creadas para facilitar esas medidas.

10. En 2020, se ejecutó al menos a cuatro jóvenes infractores, y dos de las ejecuciones tuvieron lugar durante el período sobre el que se informa. Tras 12 años de reclusión, Mohammad Hassan Rezaiee fue ejecutado el 31 de diciembre de 2020 en un caso claro de juicio sin las debidas garantías, incluidas confesiones forzadas<sup>14</sup>. En marzo de 2021, más de 80 jóvenes infractores seguían en el corredor de la muerte, y algunos, como Arman Abdolali y Ali Arjangi, corrían peligro de ser ejecutados en el momento de finalizar el presente informe.

### 3. Uso excesivo de la fuerza en el contexto de reuniones pacíficas y por parte de funcionarios de fronteras

11. Un elevado número de muertes se debe al uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios de seguridad, los agentes de fronteras y las fuerzas del orden. La situación se ve agravada por las numerosas entidades a las que la legislación iraní permite portar armas, como el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y la milicia Basij que opera bajo su mando. No hay estadísticas oficiales sobre las muertes derivadas del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.

12. Es habitual que en las protestas pacíficas se haga un uso excesivo de la fuerza. El uso letal de la fuerza en el contexto de las manifestaciones a nivel nacional de 2019, que implicó el uso de munición activa y de violencia por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, se documentó en el informe anterior del Secretario General<sup>15</sup>. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que incluso cuando las personas, por su conducta, se colocan fuera del ámbito de protección del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (relativo al derecho de reunión pacífica) —por ejemplo porque se comportan de manera violenta—, conservan sus demás derechos en virtud del Pacto, con sujeción a las limitaciones y las restricciones aplicables<sup>16</sup>. Además, deben realizarse investigaciones rápidas, transparentes, independientes e imparciales de todos los casos de uso excesivo de la fuerza.

13. También es preocupante el uso excesivo de la fuerza contra los *kolbares* (portadores fronterizos), en su mayoría miembros de minorías, en particular en las provincias que se encuentran entre las más pobres del país. Según los informes, unos 70.000 iraníes, en su mayoría de la minoría kurda, dependen de esa actividad para subsistir, incluidas las mujeres, muchas de ellas cabezas de familia. En 2020, unos 60 *kolbares*, incluidos niños, murieron y más de 170 resultaron heridos debido al uso de la fuerza por los agentes de fronteras<sup>17</sup>. Ninguno de esos asesinatos ha sido investigado por las autoridades, lo que ha provocado que esos crímenes sigan quedando impunes.

14. Del mismo modo, según se informa, los *sookhtbar* (transportadores de combustible) de Sistán y Baluchistán son víctimas de un uso excesivo de la fuerza, sin obligación de rendir cuentas. Las víctimas y sus familias suelen retirar las denuncias por temor a represalias. Un caso representativo es el asesinato de 10 *sookhtbar* a manos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica el 22 de febrero de 2021, que dio lugar a manifestaciones en las que las fuerzas de seguridad dispararon munición letal contra manifestantes y transeúntes, lo que provocó la muerte de al menos dos personas más y heridas graves a otras<sup>18</sup>. La verificación

<sup>14</sup> Véase [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26637&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26637&LangID=E).

<sup>15</sup> A/75/287, párrs. 14 a 21.

<sup>16</sup> Observación general núm. 37 (2020), párr. 9.

<sup>17</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también <https://hengaw.net/en/news/statistical-report-on-the-human-rights-situation-in-iranian-kurdistan-during-2020>.

<sup>18</sup> Véase [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26852&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26852&LangID=E).

del número de víctimas mortales fue difícil debido a la interrupción de las redes locales de datos móviles entre el 24 y el 27 de febrero de 2021<sup>19</sup>.

#### 4. Privación arbitraria de la vida en reclusión

15. Aunque no hay datos oficiales sobre el número de muertes bajo custodia, los casos denunciados indican que algunas muertes se deben a la tortura, pero también pueden deberse a la denegación de tratamiento médico. Los informes se refieren a torturas por parte de miembros de la policía, los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, sin que haya pruebas de un sistema de supervisión capaz de investigar de manera eficaz esas violaciones<sup>20</sup>. El Secretario General pide que se ponga fin al uso de la tortura, de conformidad con la prohibición absoluta establecida en la Constitución, y en consonancia con las obligaciones de la República Islámica del Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

16. Según se informa, el 10 de noviembre de 2020, Farhad Vosoughi fue torturado hasta la muerte por las fuerzas de seguridad en la prisión central de Khorramabad<sup>21</sup>. Vosoughi había sido detenido y encarcelado en octubre de 2020, por presunta participación en un asesinato. El Gobierno declaró que, según el análisis forense, la causa de la muerte fue la presencia de sustancias tóxicas.

17. Los informes ponen de manifiesto la reiterada denegación de atención médica adecuada durante la reclusión. Un número alarmante de presos, en particular defensores de los derechos humanos, presos de conciencia, ecologistas y presos políticos, han enfermado gravemente en prisión o han sufrido graves afecciones médicas que no han sido tratadas durante su reclusión. Según los informes, a Behnam Mahjoubi, un sufí gonabadi condenado a prisión tras su participación en una protesta en 2018, se le denegó repetidamente la atención médica a pesar de su estado psicosocial subyacente y de un certificado médico que indicaba que no podía soportar el encarcelamiento. Mahjoubi fue trasladado en dos ocasiones a un hospital psiquiátrico y recibió medicación sin su consentimiento. El 12 de febrero de 2021 se le administraron grandes dosis de drogas desconocidas mientras estaba en prisión, lo que le dejó en estado de coma. Su estado se mantuvo en secreto hasta que las autoridades confirmaron su muerte el 22 de febrero de 2021<sup>22</sup>. Fue enterrado inmediatamente, pese a las peticiones de una autopsia. El Gobierno negó las denuncias de denegación de la atención médica en reclusión en todos los casos planteados en el presente informe.

18. La propagación de la COVID-19 en prisiones hacinadas sin instalaciones sanitarias básicas y sin dormitorios representa un riesgo adicional para la vida de los presos<sup>23</sup>. Si bien reconoce los planes adoptados por las autoridades en febrero y marzo de 2020 de puesta en libertad temporal para evitar la propagación de la COVID-19 en las cárceles, el Secretario General reitera su preocupación por el hecho de que algunas categorías de presos hayan sido excluidas, como los presos políticos y los defensores de los derechos humanos<sup>24</sup>. Entre los presos que han contraído la COVID-19 se encuentra Salem Zand, un preso político baluchi que murió en agosto de 2020 en la Prisión Central de Zahedan<sup>25</sup>.

## B. Acceso a la justicia y rendición de cuentas

### 1. Obstáculos a la rendición de cuentas

19. La información disponible indica que las medidas adoptadas por las autoridades del Estado para prevenir las violaciones de los derechos humanos o para ofrecer un recurso

<sup>19</sup> Véase <https://netblocks.org/reports/internet-disruption-registered-in-iran-following-days-of-outages-in-southeast-oy9Yvoy3> and <https://filter.watch/en/2021/03/10/network-monitor-february-2021/>.

<sup>20</sup> Véase [www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF).

<sup>21</sup> Véase <https://hengaw.net/en/news/a-kurdish-prisoner-tortured-to-death-in-khorramabad-prison>.

<sup>22</sup> Véase <https://twitter.com/UNHumanRights/status/1363892878330707971>.

<sup>23</sup> Véase A/HRC/43/61 y [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26345&LangID=E](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26345&LangID=E).

<sup>24</sup> A/75/287, párrs. 31 a 36.

<sup>25</sup> Información recibida por el ACNUDH.

efectivo son en gran medida inexistentes o, en el mejor de los casos, insuficientes. Existe impunidad en los casos de violaciones recientes y de violaciones pasadas que no han sido investigadas ni enjuiciadas. Ese clima se ve agravado por la falta de garantías procesales, la amenaza de represalias y las presiones contra los abogados.

20. El Secretario General señala que los actos y conductas descritos en el presente informe, de confirmarse, podrían dar lugar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad penal individual. La República Islámica del Irán, como principal responsable de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incurriría en responsabilidad por los actos que se le atribuyan en contravención de sus obligaciones internacionales. Preocupa seriamente que el poder judicial no cumpla su función con respecto a otros actores estatales y que las violaciones de los derechos humanos y los delitos parezcan formar parte de una política para silenciar y desalentar la oposición política percibida o real<sup>26</sup>.

21. Los informes indican que existe una desconfianza generalizada con respecto a la denuncia de violaciones por temor a represalias y por los obstáculos para exigir responsabilidades a los funcionarios públicos. El bajo índice de condenas de los funcionarios públicos desanima a las personas a buscar justicia por la vía oficial. La práctica de pagar indemnizaciones mientras no se lleve a cabo la investigación y el enjuiciamiento perpetúa aún más la impunidad, debido a la ausencia de responsabilidad individual. Aunque la indemnización de la víctima es un elemento crucial para reparar las violaciones, no puede sustituir al proceso judicial de enjuiciamiento del autor.

## 2. Tortura y proceso con todas las garantías

22. El Secretario General está alarmado por el número de casos documentados de tortura y malos tratos a niños, mujeres y hombres. Los testimonios, las fotografías, los archivos de audio y las pruebas forenses ponen de manifiesto un patrón de coacción física y psicológica para forzar una confesión a falta de otras pruebas. Entre 2009 y 2019, los medios de comunicación del Estado difundieron confesiones forzadas de al menos 355 personas<sup>27</sup>. La gran dependencia del sistema de justicia de las confesiones durante las investigaciones parece ser un importante incentivo para los actos de tortura, que, según los informes, practican diversos actores, como la policía, los servicios de inteligencia policial, el Ministerio de Inteligencia, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y las fuerzas de seguridad. Aunque la legislación nacional invalida el uso de confesiones forzadas en los tribunales, los testimonios indican que los jueces suelen negarse a investigar las denuncias de tortura y se basan en las confesiones forzadas como prueba para la condena. Un caso emblemático es la sentencia de muerte dictada contra Navid Afkari. Un archivo de audio de su juicio hecho público posteriormente muestra que el juez no tuvo en cuenta las denuncias de tortura de Afkari ni el testimonio escrito de un testigo presencial de la violencia<sup>28</sup>. El Gobierno negó todas las referencias a denuncias de tortura en el presente informe.

23. También son motivo de preocupación los traslados forzosos de presos políticos y defensores de los derechos humanos a hospitales psiquiátricos. Los testimonios se refieren a la inyección no consentida a presos de medicamentos no especificados y descargas eléctricas<sup>29</sup>. La República Islámica del Irán no es parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

24. Las medidas de reclusión en régimen de aislamiento por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y del Ministerio de Inteligencia, que actúan bajo la autoridad del Líder Supremo y del Presidente, respectivamente, sin ninguna supervisión independiente, siguen siendo motivo de gran preocupación. En algunos casos, los reclusos han permanecido en régimen de aislamiento durante más de un año. Los testimonios ponen

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Véase <https://justice4iran.org/15120/>.

<sup>28</sup> Véanse <https://iranhumanrights.org/2020/09/witness-to-the-torture-of-executed-champion-wrestler-navid-afkari-held-incommunicado> y <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25566>.

<sup>29</sup> Véase [www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF) y [www.iranhumanrights.org/2018/11/forced-psychiatric-hospitalization-cannot-become-new-means-of-silencing-dissent-in-iran](http://www.iranhumanrights.org/2018/11/forced-psychiatric-hospitalization-cannot-become-new-means-of-silencing-dissent-in-iran).



de manifiesto el uso sistemático de períodos prolongados de reclusión en régimen de aislamiento sin acceso a atención médica, al parecer para aislar y debilitar a los reclusos durante la fase de investigación a fin de forzar confesiones, o como forma de castigo tras la condena. Habib y Vahid Afkari permanecen reclusos en régimen de aislamiento desde el 5 de septiembre de 2020, antes de la ejecución de su hermano, Navid Afkari. El uso del régimen de aislamiento prolongado puede constituir una vulneración del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>30</sup>. Su uso indefinido y prolongado también está prohibido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). En marzo de 2021, actores de la sociedad civil presentaron una demanda para pedir el fin del uso del régimen de aislamiento<sup>31</sup>.

25. La prisión preventiva prolongada es habitual. En virtud del artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, la prisión preventiva puede durar hasta dos años en determinados casos. Los estudiantes Ali Younesi y Amirhossein Moradi han permanecido en prisión preventiva desde su detención, en abril de 2020, con períodos de reclusión en régimen de aislamiento<sup>32</sup>. En noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria expresó preocupación por que el elevado número de casos en que había considerado que la República Islámica del Irán había incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos era indicio de la existencia de un problema generalizado o sistémico en relación con la detención arbitraria<sup>33</sup>.

26. La falta de representación jurídica efectiva sigue siendo una preocupación en relación con las debidas garantías. La capacidad de defensa de los abogados a menudo se ve obstaculizada, entre otras cosas, por la falta de suministro de documentos e información esenciales sobre las fechas de los tribunales, las limitaciones a las visitas de los clientes y el acoso. El artículo 48 del Código de Procedimiento Penal solo permite que las personas acusadas de delitos relacionados con la seguridad nacional seleccionen a su representante letrado de una lista de abogados aprobada previamente<sup>34</sup>. En la práctica, a las personas detenidas por delitos relacionados con la seguridad nacional se les suele denegar el acceso a un abogado durante la fase de investigación. El Gobierno afirmó que el poder judicial ha presentado una enmienda al artículo 48 para eliminar la referencia a la lista aprobada previamente.

### 3. Encarcelamiento y condenas de los participantes en las manifestaciones de 2019

27. El Secretario General está preocupado por los enjuiciamientos en relación con las protestas de noviembre de 2019, con al menos 500 personas sometidas a investigación por la vía penal. Según los informes, los detenidos fueron sometidos a tratos inhumanos y torturas para que confesaran su asociación con grupos de la oposición o Gobiernos extranjeros<sup>35</sup>. Las actas de los procesos judiciales indican que las vistas fueron breves y se celebraron a puerta cerrada y, en varios casos, sin la presencia de abogados. Los manifestantes han sido condenados a prisión por delitos relacionados con la seguridad nacional, como la condena de tres jóvenes a 10 y 20 años de prisión por el Tribunal Revolucionario de Dezful<sup>36</sup>. Los procesos ante los tribunales revolucionarios son especialmente preocupantes por la imputación de delitos de *moharebeh*, castigados con la pena capital<sup>37</sup>.

28. A la mayoría de los manifestantes detenidos se les denegó el permiso de salida, a pesar del brote de COVID-19, ya que los regímenes de suspensión temporal excluían a los condenados por delitos relacionados con la seguridad nacional a penas de prisión de más de cinco años, o establecían fianzas exorbitantes para los condenados a menos de cinco años. El

<sup>30</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 20 (1992), párr. 6.

<sup>31</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2021/03/lawsuit-by-civil-rights-activists-reignites-debate-on-solitary-confinement-in-irans-prisons>.

<sup>32</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.hrw.org/news/2020/06/06/iran-free-students-long-solitary](http://www.hrw.org/news/2020/06/06/iran-free-students-long-solitary).

<sup>33</sup> Véase A/HRC/WGAD/2020/83.

<sup>34</sup> A/74/273, párr. 12.

<sup>35</sup> Véase [www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF](http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF).

<sup>36</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.hra-news.org/2021/hranews/a-28261](http://www.hra-news.org/2021/hranews/a-28261) (en persa).

<sup>37</sup> Información recibida por el ACNUDH.

Secretario General celebra el indulto de los tribunales, anunciado en noviembre de 2020, de 157 personas condenadas por delitos relacionados con la seguridad nacional, pero lamenta que los informes indiquen que muy pocas personas condenadas por participar en las protestas de noviembre de 2019 se encontraban entre las indultadas<sup>38</sup>.

29. A algunos manifestantes encarcelados también se les denegó la atención médica. Por ejemplo, Siamak Moghimi fue condenado a cinco años de prisión por delitos relacionados con la seguridad nacional, a pesar de haber alegado ante el tribunal que no podía soportar la reclusión debido a su discapacidad psicosocial, que ha empeorado gravemente en prisión<sup>39</sup>.

#### 4. Abogados y defensores de los derechos humanos

30. Aunque celebra la suspensión temporal concedida a Nasrin Sotoudeh el 17 de marzo de 2021, el Secretario General sigue preocupado por su condena, relacionada con el ejercicio de su profesión como abogada de defensores de los derechos humanos<sup>40</sup>. También es preocupante que su familia se haya convertido en un objetivo. En febrero de 2021, la cuenta bancaria del esposo de la Sra. Sotoudeh, Reza Khandan, detenido también anteriormente por defender los derechos humanos, fue congelada sin justificación alguna. Antes de esto, la hija de la Sra. Sotoudeh fue citada<sup>41</sup>. El Gobierno señaló que a la Sra. Sotoudeh se le había concedido un permiso en tres ocasiones y tenía acceso a atención médica y visitas. También es preocupante la condena a 18 meses de cárcel de Farangis Mazloum por delitos relacionados con su protesta por las condiciones de reclusión de su hijo, Soheil Arabi, defensor de los derechos humanos y preso de larga duración. Arabi fue absuelto de nuevos cargos relacionados con la seguridad nacional, pero permanece encarcelado y, según se informa, se le ha denegado el tratamiento médico que necesitaba urgentemente<sup>42</sup>.

31. El ataque a familiares y los nuevos cargos presentados contra defensores de los derechos humanos y abogados para prolongar su detención arbitraria son hechos preocupantes. El Secretario General celebra la puesta en libertad en octubre de 2020 de Narges Mohammadi<sup>43</sup>. No obstante, Mohammadi ha sido citado a comparecer ante el tribunal en tres ocasiones desde diciembre de 2020 por un nuevo delito de “alteración del orden penitenciario”. Se han dictado contra las defensoras de los derechos de la mujer Atena Daemi y Golrokh Iraee nuevas penas de cárcel, que han mantenido a la Sra. Daemi en la cárcel y devuelto a prisión a la Sra. Iraee después de haber sido puesta en libertad. Otra tendencia preocupante es el traslado de carácter punitivo de presos de conciencia, entre los que se encuentran al menos 15 defensores de los derechos de la mujer, a prisiones remotas<sup>44</sup>.

32. El Secretario General toma nota de la sentencia de 9 de marzo de 2021 del tribunal de apelación de Teherán, que redujo la pena de prisión de Saba Kord Afshari a siete años y medio por protestar contra la legislación que impone el uso obligatorio del velo, pero sigue preocupado por su detención arbitraria. Al parecer, a la Sra. Kord Afshari se le ha denegado el tratamiento médico, ha sido agredida físicamente por los guardias de la prisión y trasladada por la fuerza a la prisión de Qarchak. La madre de Kord Afshari, Raheleh Ahmadi, sigue detenida arbitrariamente por protestar contra la legislación sobre el velo<sup>45</sup>. El Secretario General toma nota de la reducción de las penas de Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi y Mojgan Keshavarz, encarceladas por defender de manera pacífica los derechos de la mujer,

<sup>38</sup> Véase [www.irna.ir/news/84105136](http://www.irna.ir/news/84105136) (en persa).

<sup>39</sup> Véase [www.en-irana.org/after-attempting-suicide-a-report-on-the-latest-situation-of-siamak-moghimi-in-great-tehran-penitentiary](http://www.en-irana.org/after-attempting-suicide-a-report-on-the-latest-situation-of-siamak-moghimi-in-great-tehran-penitentiary).

<sup>40</sup> Véase A/74/273.

<sup>41</sup> Véase [www.iranhumanrights.org/2019/01/iran-sentences-men-who-supported-womens-protests-against-compulsory-hijab-to-six-years-prison](http://www.iranhumanrights.org/2019/01/iran-sentences-men-who-supported-womens-protests-against-compulsory-hijab-to-six-years-prison).

<sup>42</sup> Véase [www.frontlinedefenders.org/en/case/soheil-arabi-acquitted-new-charge](http://www.frontlinedefenders.org/en/case/soheil-arabi-acquitted-new-charge).

<sup>43</sup> Véase [www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26376&LangID=E](http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26376&LangID=E).

<sup>44</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2021/03/iranian-courts-are-unlawfully-banishing-political-prisoners-into-prison-exile/>.

<sup>45</sup> Véase [www.frontlinedefenders.org/en/case/prison-sentence-saba-kord-afshari-reduced-7-years-and-6-months](http://www.frontlinedefenders.org/en/case/prison-sentence-saba-kord-afshari-reduced-7-years-and-6-months).



si bien sigue preocupado por su reclusión, sus traslados a diferentes prisiones en 2020, sus problemas de salud y la denegación de su derecho de visita<sup>46</sup>.

33. Los abogados siguieron siendo víctimas de ataques durante el período sobre el que se informa. En febrero de 2021, se confirmó la condena de ocho años de prisión de Hoda Amid por “colaboración con el Gobierno hostil de los Estados Unidos de América contra la República Islámica en cuestiones relacionadas con la mujer y la familia”, tras haber organizado talleres sobre los derechos de la mujer con la socióloga Najmeh Vahedi. La sentencia de siete años de prisión de la Sra. Vahedi fue confirmada en el mismo caso<sup>47</sup>. Reza Eslami fue encarcelado por delitos similares por participar en un taller sobre el estado de derecho. En febrero de 2021, un tribunal revolucionario lo condenó a siete años de prisión por cooperación con un “Estado enemigo” por haber participado en un curso de formación jurídica en Chequia<sup>48</sup>. El Secretario General toma nota de que se ha puesto temporalmente en libertad a los abogados Mohammad Najafi y Payam Derafshan, pero sigue preocupado por que hayan sido condenados a prisión por su trabajo.

34. Los presos de conciencia, los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos y los abogados son excluidos de forma desproporcionada de la puesta en libertad temporal<sup>49</sup>. Algunos presos políticos llevan años en la cárcel sin un solo día de permiso. Por ejemplo, Maryam Akbari Monfared, condenada a 15 años de prisión por participar en las protestas de 2009, lleva 12 años encarcelada. El acoso contra ella aumentó después de que presentara una queja formal en la que solicitaba una investigación oficial de las ejecuciones de presos políticos, incluidos sus hermanos, en 1988<sup>50</sup>. Asimismo, Zeinab Jalalian, una presa política kurda que cumple cadena perpetua por *moharebeh*, lleva en prisión desde 2008 sin permiso alguno<sup>51</sup>.

## 5. Ecologistas

35. Siete ecologistas de la Persian Wildlife Heritage Foundation permanecen detenidos acusados de espionaje, a pesar de que una comisión oficial no ha encontrado pruebas de espionaje<sup>52</sup>. A excepción de uno de los ecologistas, se les ha negado todo permiso desde su encarcelamiento en enero y febrero de 2018. El Secretario General reitera su preocupación por el hecho de que una de las ecologistas, Niloufar Bayani, haya sido condenada en parte debido a su trabajo para las Naciones Unidas. La Sra. Bayani se enfrenta a nuevas acciones por difamación tras denunciar malos tratos, tortura y acoso sexual durante su interrogatorio<sup>53</sup>.

## 6. Personas extranjeras o con doble nacionalidad

36. El Secretario General sigue preocupado por las acusaciones de espionaje contra ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros. El ciudadano iraní-sueco Ahmadreza Djalali sigue corriendo el riesgo de ser ejecutado de forma inminente y se encuentra en un estado de salud crítico. Está recluido en régimen de aislamiento desde noviembre de 2020, cuando lo sacaron de su celda para preparar su ejecución<sup>54</sup>. El Secretario General toma nota de la puesta en libertad de la ciudadana británico-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe en marzo de 2021, una vez cumplida su pena, pero le preocupa que una semana después fuera citada

<sup>46</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.iranhr.net/media/files/HRD\\_Report\\_Iran\\_Human\\_Rights\\_Eng.pdf](http://www.iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf), págs. 44 a 46.

<sup>47</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/iran\\_-\\_ua-\\_najmeh\\_vahedi\\_hoda\\_amid\\_16\\_feb\\_2021\\_en.pdf](http://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/iran_-_ua-_najmeh_vahedi_hoda_amid_16_feb_2021_en.pdf).

<sup>48</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.hra-news.org/2021/hranews/a-28731](http://www.hra-news.org/2021/hranews/a-28731) (en persa).

<sup>49</sup> A/HRC/43/61, párrs. 58 y 59.

<sup>50</sup> Véanse <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=22861> y <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23162>.

<sup>51</sup> A/HRC/WGAD/2016/1.

<sup>52</sup> Véanse [www.irna.ir/news/82927394](http://www.irna.ir/news/82927394) (en persa) y [www.ensafnews.com/216369](http://www.ensafnews.com/216369) (en persa).

<sup>53</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2020/02/conservationist-niloufar-bayani-iran-torture-and-sexual-threats-detailed-in-letters-by-jailed-former-un-environment-consultant/>.

<sup>54</sup> Véase <https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1335042021SPANISH.pdf>.

ante el tribunal por nuevos cargos<sup>55</sup>. La condena de 10 años de prisión del ciudadano austriaco-iraní Massud Mossaheb fue ratificada en julio de 2020, una decisión basada en parte en una confesión forzada emitida posteriormente por la televisión estatal. Al Sr. Mossaheb se le ha denegado un tratamiento médico adecuado para las graves dolencias que padece<sup>56</sup>. Existen denuncias similares de tratamiento médico inadecuado relacionadas con el ciudadano austriaco-iraní Kamran Ghaderi y el ciudadano británico-estadounidense-iraní Morad Tahbaz<sup>57</sup>. El ciudadano estadounidense-iraní Baquer Namazi sigue en libertad por motivos médicos, pero tiene prohibido salir del país. Su hijo Siamak Namazi permanece encarcelado. El ciudadano británico-iraní Anoosheh Ashoori, condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión por delitos relacionados con la seguridad nacional, fue supuestamente obligado a firmar confesiones bajo tortura y recluido en régimen de aislamiento prolongado. En febrero de 2021, no se permitió al Sr. Ashoori utilizar el teléfono, negándole el contacto con su familia<sup>58</sup>.

## 7. Mujeres y niñas

37. El Secretario General se congratula de la finalización del proyecto de ley para preservar la dignidad y la protección de las mujeres contra la violencia, presentado al parlamento el 13 de enero de 2021<sup>59</sup>. El proyecto de ley tipifica como delito la violencia y la conducta sexual indebida contra las mujeres y encomienda a diferentes organismos del Estado la adopción de una serie de medidas de prevención y protección. No obstante, el proyecto de ley no ofrece una protección eficaz ni garantiza el acceso a los recursos<sup>60</sup>. No tipifica el matrimonio infantil ni la violación conyugal, ni deroga las disposiciones discriminatorias contra la mujer del Código Civil y el Código Penal Islámico, incluida la limitada definición de violencia y agresión sexuales. Las víctimas se muestran reacias a presentar denuncias debido a los exigentes requisitos en materia de prueba para demostrar la coacción y al riesgo de ser enjuiciadas por relaciones sexuales extramatrimoniales, o porque no están de acuerdo con la imposición de la pena de muerte al autor<sup>61</sup>.

38. De conformidad con el Código Civil, la edad legal para que las niñas y los niños contraigan matrimonio siguen siendo los 13 y 15 años, respectivamente, y las niñas de menor edad también pueden casarse en determinadas condiciones<sup>62</sup>. Entre marzo y septiembre de 2020 se registraron oficialmente los matrimonios de más de 16.000 niñas de entre 10 y 14 años, y las cifras oficiales indican la inscripción de 710 nacimientos de madres menores de 15 años y más de 34.000 nacimientos de madres de entre 15 y 19 años en el mismo período<sup>63</sup>. El Gobierno afirmó que la formación de los jueces ha hecho que no se expidan permisos de matrimonio en los casos en que las partes insisten y se remiten a los tribunales.

39. Sigue siendo preocupante la legislación que impone el uso obligatorio del velo, que es aplicada por la policía, la milicia Basij y la “policía de la moral”. Mostrarse en público sin el hiyab se castiga con penas de prisión. En mayo de 2020, la unidad cibernética de la policía anunció que aparecer en las redes sociales sin hiyab constituía una infracción de la ley<sup>64</sup>. Desde marzo de 2019, la policía también ha utilizado la mensajería de texto para enviar citaciones de comparecencia a los conductores y pasajeros que se quitan el hiyab en los

<sup>55</sup> Véase [www.bbc.com/news/uk-56390394](http://www.bbc.com/news/uk-56390394).

<sup>56</sup> Véase <https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1333012020spanish.pdf>.

<sup>57</sup> Véase <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25846>.

<sup>58</sup> Véase [www.theguardian.com/world/2021/feb/19/briton-held-in-iran-completely-shut-off-after-losing-phone-access](http://www.theguardian.com/world/2021/feb/19/briton-held-in-iran-completely-shut-off-after-losing-phone-access).

<sup>59</sup> Véase <http://women.gov.ir/fa/news/14159/> (en persa).

<sup>60</sup> Véase <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25651>.

<sup>61</sup> Véase [www.hrw.org/news/2020/09/09/iran-having-its-metoo-moment](http://www.hrw.org/news/2020/09/09/iran-having-its-metoo-moment).

<sup>62</sup> Véase el Código Civil, art. 1041.

<sup>63</sup> Véanse <https://cutt.ly/gx2c1nN> (en persa) y [www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/gozareshavf2-99.pdf](http://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/gozareshavf2-99.pdf) (en persa).

<sup>64</sup> Véanse <https://faratitr.ir/fa/news/5774/> (en persa) y <http://yrcnews.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=3240&SGR=5373&Id=234838> (en persa).

coches. En los primeros cuatro meses de aplicación del plan se ha citado a los propietarios de más de 300.000 vehículos<sup>65</sup>.

## 8. Situación de las minorías

40. Además de las violaciones descritas en otras partes del presente informe, en enero de 2021 más de 100 activistas de la sociedad civil kurda fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente, y algunos fueron víctimas de desaparición forzada<sup>66</sup>.

41. También es preocupante la criminalización de la defensa de los derechos de las minorías. El enjuiciamiento de Zara Mohammadi y Anisa Jafari-Mehr por enseñar la lengua y la cultura kurdas es representativo. En febrero de 2021 se ratificó la condena a prisión de la Sra. Mohammadi, pero se redujo a cinco años. La Sra. Jafari-Mehr fue detenida por las fuerzas de seguridad en su domicilio en noviembre de 2020 y trasladada a un lugar desconocido. Fue citada a comparecer ante el tribunal el 18 de febrero de 2021<sup>67</sup>. En julio de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 15 años de prisión contra Abbas Lisani, por delitos excesivamente amplios contra la seguridad nacional, a raíz de la defensa del Sr. Lisani del derecho de la minoría de habla turca en la República Islámica del Irán a la educación en su lengua materna y la protesta contra las políticas del Gobierno<sup>68</sup>.

## C. Derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica

### 1. Organizaciones de la sociedad civil

42. El Secretario General toma nota con preocupación de la decisión judicial del 3 de marzo de 2021, por la que se disuelve la Imam Ali's Popular Students Relief Society, una destacada organización no gubernamental que trabaja en la lucha contra la pobreza. Fundada en 1999, la sociedad cuenta con más de 12.000 voluntarios que prestan un apoyo esencial a grupos y niños marginados. El Ministerio del Interior inició el proceso contra ella tras una serie de medidas, como el cierre de sus oficinas, una campaña de descrédito por parte de los medios de comunicación estatales y la detención de su fundadora, Sharmin Meymandinejad, y los miembros de su junta directiva<sup>69</sup>. El Sr. Meymandinejad permaneció recluido en régimen de aislamiento durante más de cuatro meses antes de ser puesto en libertad bajo fianza el 27 de octubre de 2020. La decisión judicial afirma que la sociedad se desvió de su misión original y no respetó las creencias religiosas al cuestionar normas islámicas como la ley del talión y promover la falsedad al publicar declaraciones contra la República Islámica del Irán<sup>70</sup>. El Secretario General insta al Gobierno a que revoque la decisión de disolver la Imam Ali's Popular Students Relief Society y le permita desarrollar su labor sin interferencias<sup>71</sup>. El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha señalado que la suspensión y la disolución involuntaria de una asociación son las formas más severas de restricción de la libertad de asociación<sup>72</sup>.

43. Hay continuas denuncias de injerencias en la independencia de los colegios de abogados. El 14 de noviembre de 2020, una directiva del poder judicial creó la Oficina General de Supervisión de los Abogados, otorgando nuevas facultades discrecionales a la judicatura, en contravención de la ley iraní sobre la independencia del colegio de abogados. La directiva amplía el alcance de las infracciones disciplinarias y autoriza a investigar cuestiones como la observación del hiyab por parte de los abogados en las redes sociales. La

<sup>65</sup> Véase [www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/27/2056803](http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/27/2056803) (en persa).

<sup>66</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.hrw.org/news/2021/02/03/joint-letter-urgent-international-action-needed-secure-release-kurdish-activists](https://www.hrw.org/news/2021/02/03/joint-letter-urgent-international-action-needed-secure-release-kurdish-activists).

<sup>67</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también <https://cpj.org/data/people/anisa-jafari-mehr/>.

<sup>68</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también <https://iranhr.net/en/articles/4355/>.

<sup>69</sup> Véanse [www.kayhan.ir/fa/news/191280](http://www.kayhan.ir/fa/news/191280) (en persa) y <http://kayhan.ir/fa/news/158067> (en persa).

<sup>70</sup> Véase [www.hrw.org/news/2021/03/10/iran-joint-statement-court-ordered-dissolution-prominent-charity-group](https://www.hrw.org/news/2021/03/10/iran-joint-statement-court-ordered-dissolution-prominent-charity-group).

<sup>71</sup> Véase [www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26141&LangID=E](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26141&LangID=E).

<sup>72</sup> A/HRC/20/27, párr. 75.

autonomía de los colegios de abogados ya se había visto mermada por normativas anteriores, incluido el intento del poder judicial de sustituir los estatutos vigentes de dichos colegios<sup>73</sup>.

## 2. Restricciones a la reunión pacífica y a los derechos laborales

44. El Secretario General sigue preocupado por la criminalización del ejercicio del derecho de reunión pacífica y por la dispersión violenta de las protestas pacíficas. Entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de enero de 2021, las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza para dispersar a los participantes en al menos 39 protestas de este tipo<sup>74</sup>.

45. Los defensores de los derechos laborales siguen siendo acosados, detenidos, encarcelados y azotados. Desde agosto de 2020, más de 20.000 trabajadores participaron en huelgas laborales en 50 plantas petroleras y petroquímicas para exigir la aplicación de la ley de clasificación de puestos de trabajo<sup>75</sup>. Las acciones conexas han continuado, y se han celebrado protestas en enero y febrero de 2021. Los implicados han sido vigilados por el personal de seguridad, y a algunos no se les ha renovado el contrato o se les ha amenazado con el despido, la detención y los cargos penales.

46. El personal de enfermería sigue estando en una situación precaria, con contratos de corta duración y salarios bajos y con retrasos. El 13 de agosto de 2020, diez enfermeras fueron detenidas y puestas en libertad el mismo día tras protestar por sus condiciones de trabajo en Mashhad<sup>76</sup>.

47. Los trabajadores de la empresa de caña de azúcar Haft Tappeh iniciaron nuevas huelgas en junio de 2020. El Secretario General toma nota de algunos avances positivos en esta larga controversia, como una investigación parlamentaria con una reunión con los defensores de los derechos laborales, y el indulto de algunos trabajadores de Haft Tappeh condenados por activismo en materia de derechos laborales. No obstante, desde que se reanudaron las huelgas, se ha seguido acosando, deteniendo y persiguiendo a trabajadores. En febrero de 2021, Ali Nejati fue citado para comenzar a cumplir una condena de cinco años de prisión respecto de la cual había sido previamente indultado<sup>77</sup>. Sepideh Qolijan, una reportera independiente de asuntos laborales condenada por informar sobre una manifestación de trabajadores de Haft Tappeh, comenzó a cumplir una condena de cinco años en junio de 2020 tras negarse a firmar una carta de disculpa<sup>78</sup>.

48. Otros defensores de los derechos laborales siguen siendo detenidos arbitrariamente, como el profesor Esmail Abdi, encarcelado desde 2016 por defender los derechos laborales. Su condena condicional de 10 años de prisión fue impuesta de nuevo en mayo de 2020<sup>79</sup>. Jafar Azimzadeh, uno de los líderes del Sindicato Libre de Trabajadores Iraníes, recibió una nueva condena a 13 meses de cárcel en agosto de 2020<sup>80</sup>. Al igual que en el caso del Sr. Abdi, la nueva pena de prisión es, al parecer, un intento de mantener al Sr. Azimzadeh en prisión después de haber sido indultado en un momento anterior de 2020. Según se informa, a los señores Abdi y Azimzadeh se les ha negado la atención médica en la cárcel<sup>81</sup>. Arash Johari fue detenido en octubre de 2020, presuntamente recluido en régimen de aislamiento y condenado, en enero de 2021, a 16 años de prisión por delitos relacionados con la seguridad

<sup>73</sup> Véanse <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92825> (en persa) y A/HRC/34/65, párrs. 34 a 36.

<sup>74</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.* Véase también <https://iranhumanrights.org/2021/03/traditional-new-year-furloughs-and-other-privileges-denied-to-irans-political-prisoners/>.

<sup>78</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2020/06/sepideh-qolijan-refuses-to-beg-for-pardon-goes-back-to-prison/>.

<sup>79</sup> Véase [www.iranhumanrights.org/2020/06/prominent-teachers-rights-activist-facing-additional-years-in-prison](http://www.iranhumanrights.org/2020/06/prominent-teachers-rights-activist-facing-additional-years-in-prison).

<sup>80</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también <https://iranhumanrights.org/2020/08/new-conviction-against-imprisoned-labor-leader-upheld-to-keep-him-behind-bars/>.

<sup>81</sup> Información recibida por el ACNUDH.

nacional<sup>82</sup>. En noviembre de 2020, Davood Rafiei fue castigado con 74 latigazos por protestar contra su despido improcedente<sup>83</sup>.

### 3. Libertad de los periodistas y los medios de comunicación

49. Los informes calculan que, a 1 de diciembre de 2020, había al menos 15 periodistas reclusos<sup>84</sup>. El 20 de enero de 2021, Reza Taleshian Jelodarzadeh, redactor jefe de la revista *Nour-e Azadi*, fue detenido y condenado a tres años de prisión por agitar la opinión pública y difundir propaganda antisistema, en parte debido a sus publicaciones en las redes sociales<sup>85</sup>. Mahmoud Mahmoudi, periodista kurdo y editor del semanario *Aigrin Roj*, fue detenido en enero de 2021 y recluso en un lugar no revelado. Recientemente había firmado una carta contra la detención masiva de activistas kurdos<sup>86</sup>. Kayvan Samimi, director de la revista *Iran-e Farda*, fue detenido en diciembre de 2020 para empezar a cumplir su pena de tres años de cárcel por delitos relacionados con la seguridad nacional tras asistir a una manifestación del Primero de Mayo<sup>87</sup>. En febrero de 2021, el fotoperiodista Nooshin Jafari fue llevado a prisión para cumplir una condena de cuatro años por insulto a lo sagrado y propaganda contra el Estado<sup>88</sup>. El periodista Mohammad Mosaed abandonó el país tras ser condenado a casi cinco años de prisión por delitos relacionados con la seguridad nacional por sus publicaciones en las redes sociales y sus reportajes de investigación<sup>89</sup>. En febrero de 2021 se confirmó la condena de 11 años de prisión a Arash Ganji por delitos relacionados con la seguridad nacional por haber traducido un libro sobre la región de población kurda del norte de la República Árabe Siria<sup>90</sup>. La sentencia del Sr. Ganji se produce después del encarcelamiento de otros tres miembros de la Asociación de Escritores Iraníes en octubre de 2020 para cumplir las penas de prisión impuestas por su labor de lucha contra la censura<sup>91</sup>. Además, se siguieron denunciando amenazas contra periodistas que trabajan para servicios de noticias en persa radicados en el extranjero y contra sus familias.

### 4. Libertad de expresión en Internet

50. Entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de enero de 2021, más de 57 personas fueron detenidas y encarceladas por actividades y publicaciones en Instagram, Telegram y otras plataformas de medios sociales, acusadas, entre otras cosas, de “insultos al profeta del Islam”, “vinculación con grupos de la oposición” e “insultos a la policía”<sup>92</sup>. En octubre de 2020, se informó de que Mohammad Javad Shakuri Moghadam, director general de Aparat, una plataforma para compartir vídeos, había sido condenado a 10 años de prisión por “fomentar la corrupción” en razón de un vídeo publicado por un usuario que contenía entrevistas a niños a los que se les preguntaba cómo habían nacido. Otros siete acusados en el caso fueron condenados a 11 años de cárcel<sup>93</sup>. En noviembre de 2020, agentes de los servicios de inteligencia detuvieron a Abbas Saedi, escritor y activista desde el canal de Telegram “Shakhabit”, tras irrumpir violentamente en su casa<sup>94</sup>.

<sup>82</sup> *Ibid.* Véase también [www.amnesty.org.uk/urgent-actions/british-iranian-labour-activist-detained](https://www.amnesty.org.uk/urgent-actions/british-iranian-labour-activist-detained).

<sup>83</sup> Zamaneh Media, “Labour rights in Iran: quarterly report No. 15”, octubre-diciembre de 2020, pág. 12.

<sup>84</sup> Véase <https://cpj.org/reports/2020/12/record-number-journalists-jailed-imprisoned/>.

<sup>85</sup> Véase <https://cpj.org/2021/02/iran-arrests-journalist-reza-taleshian-jelodarzadeh/>.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Véase <https://cpj.org/2020/12/iranian-journalist-kayvan-samimi-begins-3-year-prison-sentence-over-protest-coverage/>.

<sup>88</sup> Véase <https://cpj.org/2021/02/iranian-journalist-nooshin-jafari-begins-4-year-jail-term-on-propaganda-and-insult-charges/>.

<sup>89</sup> Véase <https://cpj.org/2021/01/deportation-for-iranian-journalist-mohammad-mosaed-not-on-the-table-in-turkey-official-says/>.

<sup>90</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2021/03/for-translating-a-book-about-syria-arash-ganji-must-serve-5-years-in-an-iranian-prison/>.

<sup>91</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2020/12/iranian-authorities-go-after-more-members-of-writers-association/>.

<sup>92</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>93</sup> Véase [www.rferl.org/a/iranian-youtube-ceo-sentenced-to-10-years-over-video-uploaded-by-user/30913476.html](https://www.rferl.org/a/iranian-youtube-ceo-sentenced-to-10-years-over-video-uploaded-by-user/30913476.html).

<sup>94</sup> Información recibida por el ACNUDH.

51. Siguieron produciéndose cierres e interrupciones de los servicios de Internet y de telecomunicaciones, en particular en relación con las protestas<sup>95</sup>. Hubo cortes durante las protestas en línea contra la pena de muerte, interrupciones de Internet tras las protestas contra el Gobierno en Behbahan en julio de 2020, cortes en Teherán en el contexto de las multitudes que conmemoraban la muerte del cantante Mohammad Reza Shajarian en octubre de 2020 e interrupciones del acceso a los datos por telefonía móvil durante el uso letal de la fuerza en Sistán y Baluchistán en febrero de 2021<sup>96</sup>. Los cierres de Internet vulneran el derecho a la libertad de expresión y no pueden justificarse en ninguna circunstancia<sup>97</sup>.

52. Además, se siguió censurando contenidos en línea mediante el bloqueo y el filtrado de sitios web y plataformas de medios sociales en cumplimiento de órdenes del Consejo Supremo del Ciberespacio, el poder judicial o el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Los sitios web de Telegram, Twitter, Facebook y YouTube permanecen bloqueados e inaccesibles sin herramientas para eludir la censura. En enero de 2021, las autoridades consideraron que la aplicación de mensajería Signal tenía contenido delictivo y, al parecer, ordenaron a los operadores que la bloquearan<sup>98</sup>.

## **D. Derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la salud y repercusiones de las sanciones**

### **1. La pobreza y la situación económica**

53. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la tasa anual de actividad económica individual cayó un 2,9 %. Cerca de 1,5 millones de personas abandonaron el mercado laboral, la gran mayoría mujeres. Antes de eso, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral era una quinta parte de la de los hombres<sup>99</sup>. En enero de 2021, las autoridades confirmaron que, en 2020, un millón de personas habían perdido su trabajo debido a las consecuencias económicas de la pandemia<sup>100</sup>. La tasa de inflación oficial no ha dejado de aumentar, alcanzando el 48,2 % en febrero de 2021<sup>101</sup>. Los precios medios de los alimentos aumentaron un 59,9 % entre enero de 2020 y enero de 2021. La subida de los precios ha contribuido a situar a cada vez más segmentos de la población por debajo del umbral de pobreza<sup>102</sup>. En diciembre de 2020, se anunció que el 35 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza<sup>103</sup>. En febrero de 2021, los pensionistas y los empleados públicos jubilados de una docena de ciudades protestaron por la escasa pensión estatal que recibían, que los dejaba por debajo del umbral de pobreza<sup>104</sup>.

54. Al empeorar la situación económica, los trabajadores desempleados de distintas ciudades se reunieron bajo el lema “Trabajadores hambrientos”<sup>105</sup>. En enero de 2021, los medios de comunicación nacionales informaron de un aumento de más del 4,2 % de las muertes por suicidio entre marzo y diciembre de 2020. La situación es especialmente grave en las provincias con minorías, como Juzestán y Sistán y Baluchistán. También se produjeron suicidios entre niños que viven en la pobreza<sup>106</sup>.

<sup>95</sup> Véanse [www.accessnow.org/iran-blackout-2021-internet-shutdowns-sistan-baluchistan](http://www.accessnow.org/iran-blackout-2021-internet-shutdowns-sistan-baluchistan) y <https://iran-shutdown.amnesty.org/>.

<sup>96</sup> <https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-iran-as-thousands-gather-to-mourn-singer-shajarian-Q8okW38n>.

<sup>97</sup> Véase la resolución 32/13 del Consejo de Derechos Humanos. Véase también, Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 37 (2020), párr. 34.

<sup>98</sup> Véase [www.rferl.org/a/iran-reportedly-orders-operators-to-block-signal-messaging-app/31068217.html](http://www.rferl.org/a/iran-reportedly-orders-operators-to-block-signal-messaging-app/31068217.html).

<sup>99</sup> Véase [www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%2099-3.pdf](http://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%2099-3.pdf) (en persa).

<sup>100</sup> Véase [www.ilna.news/fa/tiny/news-976322](http://www.ilna.news/fa/tiny/news-976322) (en persa).

<sup>101</sup> Véase <https://cutt.ly/gx9yRg4> (en persa).

<sup>102</sup> Véase [www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/dahake.pdf](http://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/dahake.pdf) y [www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/dahake.pdf](http://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/dahake.pdf) (en persa).

<sup>103</sup> Véase <https://cutt.ly/fx9yJBJ>.

<sup>104</sup> Véase <https://iranhumanrights.org/2021/01/suffering-iranian-retirees-joining-nationwide-protests-against-chronic-state-failures-swo>.

<sup>105</sup> Véanse [www.ilna.news/fa/tiny/news-1009290](http://www.ilna.news/fa/tiny/news-1009290) (en persa) y [www.rouyad24.ir/0010Kr](http://www.rouyad24.ir/0010Kr) (en persa).

<sup>106</sup> *Ibid.*



55. El Secretario General reitera su preocupación por las repercusiones de la crisis económica en las condiciones de vida<sup>107</sup>. Entre los retos se encuentran las limitaciones de recursos asociadas a la imposición de sanciones, sobre todo a las exportaciones de petróleo y el sector financiero, y los efectos más amplios de la COVID-19 en la actividad económica general. En junio de 2020, el Gobierno distribuyó nuevos paquetes de asistencia financiera entre tres millones de hogares vulnerables durante cuatro meses<sup>108</sup>. Los subsidios en efectivo oscilaban entre 2 y 6 millones de riales para los hogares de una a cinco personas<sup>109</sup>. En total, el 4,4 % del producto interno bruto se destinó a préstamos para empresas afectadas y hogares vulnerables<sup>110</sup>.

## 2. Derecho a la salud

56. Como el Secretario General ha destacado en informes anteriores, las sanciones y restricciones bancarias han tenido efectos adversos en el sector de la salud, incluida la escasez de productos farmacéuticos y médicos<sup>111</sup>. La pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas del sistema sanitario. A 1 de octubre de 2020, el sector sanitario solo había recibido el 27 % de los 1.100 millones de dólares de los Estados Unidos asignados del fondo de desarrollo nacional<sup>112</sup>. Los profesionales sanitarios no habían recibido sus salarios durante meses y habían estado trabajando en turnos extra y con equipos de protección limitados<sup>113</sup>. En marzo de 2021, más de 550 profesionales médicos, miembros del personal de enfermería y otros trabajadores de la salud habían muerto a causa de la COVID-19<sup>114</sup>.

57. Las sanciones han afectado al acceso del Gobierno a las reservas de divisas para adquirir suministros médicos y a la importación de esos productos, como la insulina<sup>115</sup>. El país produce aproximadamente el 97 % de los medicamentos que se utilizan en el país, pero dispone de pocas divisas para comprar material de producción<sup>116</sup>. Los medicamentos producidos en el extranjero necesarios para el tratamiento de enfermedades que suponen una amenaza para la vida y enfermedades raras siguen siendo escasos<sup>117</sup>.

58. El Secretario General y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hecho un llamamiento a la suspensión de las sanciones que podrían socavar la capacidad de los países para hacer frente a la pandemia de COVID-19<sup>118</sup>. Preocupa que los complejos procesos normativos, el acceso limitado a servicios bancarios no sancionados, la escasez de divisas y el exceso de celo en el cumplimiento por terceros potencialmente afectados hayan puesto en peligro el comercio de productos y equipos médicos<sup>119</sup>.

59. Las críticas internas a la gestión del Gobierno de la pandemia de COVID-19 aumentaron a la vista de la elevada tasa de mortalidad; en octubre de 2020, incluso los medios de comunicación estatales informaron de que se producía una muerte cada tres minutos<sup>120</sup>. Los expertos en salud han expresado su preocupación por la incongruencia de las cifras

<sup>107</sup> A/74/273, párrs. 59 a 65, y A/HRC/43/20, párrs. 44 a 58.

<sup>108</sup> Véase [www.irna.ir/news/83718476](http://www.irna.ir/news/83718476) (en persa).

<sup>109</sup> Véase [www.amar.org.ir/news/ID/12946](http://www.amar.org.ir/news/ID/12946) (en persa).

<sup>110</sup> Véase [www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19](http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19) y [www.isna.ir/news/99072921467](http://www.isna.ir/news/99072921467) (en persa).

<sup>111</sup> A/74/273, párr. 59, y A/HRC/43/20, párr. 58. Véase también [www.irna.ir/news/84057232](http://www.irna.ir/news/84057232) (en persa).

<sup>112</sup> Véase [www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/235973](http://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/235973) (en persa).

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>115</sup> Véase <https://khabaronline.ir/news/1444878> (en persa).

<sup>116</sup> Véase <https://ifpnews.com/iran-producing-97-of-medicines-it-needs-domestically>.

<sup>117</sup> Véase [www.mehrnews.com/news/4688345](http://www.mehrnews.com/news/4688345) (en persa).

<sup>118</sup> Véanse [www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it](http://www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it), [www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members](http://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members) y [www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=S](http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=S).

<sup>119</sup> A/74/273, párr. 63, y A/HRC/43/20, párr. 50.

<sup>120</sup> Véanse <https://covid19.who.int/table>, [www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-reports-covid-19-death-every-three-minutes-speaker-tests-positive-idUSKBN27D1KZ](http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-reports-covid-19-death-every-three-minutes-speaker-tests-positive-idUSKBN27D1KZ), [www.tabnak.ir/fa/news/1005282](http://www.tabnak.ir/fa/news/1005282) (en persa) y <https://hamshahrionline.ir/x6zbY> (en persa).

oficiales sobre la COVID-19 y la falta de transparencia<sup>121</sup>. El 8 de enero de 2021, el Líder Supremo prohibió la importación de vacunas producidas en los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que provocó críticas sobre la politización de la campaña de vacunación<sup>122</sup>. El 9 de febrero de 2021, el Gobierno puso en marcha su propia campaña de vacunación contra la COVID-19<sup>123</sup>.

### 3. Derecho a una vivienda adecuada y desalojos forzosos

60. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil. El precio medio de la vivienda en el verano de 2020 aumentó un 101 % y el del alquiler un 43,8 % en comparación con el año anterior<sup>124</sup>. La escasez de viviendas asequibles ha contribuido con el tiempo al aumento de las viviendas informales y la expansión de asentamientos considerados ilegales, sobre todo en zonas habitadas por minorías<sup>125</sup>. Según las cifras oficiales, 19 millones de iraníes viven en asentamientos informales, como barrios marginales y estructuras construidas en terrenos con acceso limitado al agua y la electricidad. Los informes oficiales determinaron que, en octubre de 2020, el 40 % de la población urbana vivía en algún tipo de vivienda inadecuada<sup>126</sup>. El Gobierno describió las macropolíticas de vivienda existentes para aplicar el derecho constitucional a la vivienda, a pesar de los desafíos que planteaban la COVID-19 y las sanciones.

61. Los funcionarios municipales calcularon que el número de personas sin hogar en los albergues de Teherán aumentaría de 490.000 a 700.000 personas entre marzo de 2020 y marzo de 2021<sup>127</sup>. La proporción de mujeres en esos refugios experimentó un incremento del 20 % entre marzo y octubre de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior, llegando a más de 27.100 mujeres<sup>128</sup>. Los albergues ya estaban bajo presión, y el brote de COVID-19 ha puesto al descubierto las enormes desigualdades estructurales preexistentes en el derecho a la vivienda.

62. Entre los obstáculos para la efectividad del derecho a una vivienda adecuada cabe citar la falta de una infraestructura financiera eficaz y la mala reglamentación de las instituciones, incluidas las de crédito, sumadas a una oferta limitada de viviendas asequibles<sup>129</sup>. Los proyectos de desarrollo tienden a dar prioridad a las propiedades de alta calidad frente a las viviendas para ingresos bajos y medios. Para los grupos con menores ingresos, la asequibilidad es el principal obstáculo de acceso a la vivienda<sup>130</sup>. El Gobierno se refirió a su normativa y a los incentivos para proporcionar viviendas a los veteranos y sus familias, a las víctimas de desastres naturales y a las personas con discapacidad.

63. La falta de seguridad de la tenencia, identificada como un componente del derecho a una vivienda adecuada<sup>131</sup>, representa otro obstáculo, en particular en vista de los desalojos forzosos. Debido a la falta de títulos de propiedad oficiales, muchos habitantes viven bajo la constante amenaza de desalojo. Los acontecimientos actuales ponen de manifiesto que ni siquiera los títulos de propiedad oficiales protegen contra los desalojos forzosos y las confiscaciones<sup>132</sup>.

64. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la demolición de viviendas suburbanas de residentes marginados ha continuado, a pesar de las recomendaciones de las Naciones

<sup>121</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también <https://cpj.org/2020/08/iran-shuts-down-economic-newspaper-over-covid-19-reporting/>.

<sup>122</sup> Véase [www.hrw.org/news/2021/01/12/iran-khameneis-reckless-ban-covid-19-vaccine#](http://www.hrw.org/news/2021/01/12/iran-khameneis-reckless-ban-covid-19-vaccine#).

<sup>123</sup> Véase <https://cutt.ly/xx9akpk> (en persa).

<sup>124</sup> Véase <https://amar.org.ir/Portals/0/News/1399/nashriye99-2mas.pdf> (en persa).

<sup>125</sup> E/C.12/IRN/CO/2, párr. 23.

<sup>126</sup> Véase <https://cutt.ly/Cx9sJbK> (en persa) y <https://cutt.ly/7x9s9vK> (en persa).

<sup>127</sup> Véase <https://cutt.ly/Mx9icj5> (en persa).

<sup>128</sup> Véase <https://cutt.ly/Hx9iT61> (en persa).

<sup>129</sup> Véase <http://uploads.habitat3.org/hb3/IR-IRAN-National-Habitat-3-Report-2016.pdf>.

<sup>130</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>131</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 4 (1991), párr. 8 a).

<sup>132</sup> Información recibida por el ACNUDH.

Unidas de suspensión de los desalojos forzosos durante ese período<sup>133</sup>. En junio de 2020, se demolieron las casas de los asentamientos informales en Chahardangeh, en la provincia de Teherán. El derribo de las restantes residencias de la zona se detuvo temporalmente<sup>134</sup>. En noviembre de 2020, en las afueras de Bandar Abbas, en la provincia de Ormuzgán, Tayebheh Ramezanzadeh se prendió fuego después de que funcionarios municipales demolieran su residencia<sup>135</sup>. En septiembre de 2020, los agricultores de seis aldeas, con un total de 60 familias, en Sardasht, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, recibieron una orden de desalojo tras una decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional<sup>136</sup>.

65. Los desalojos forzosos se llevaron a cabo a menudo en relación con proyectos de desarrollo. No se ofrecieron viviendas alternativas ni indemnizaciones, lo que provocó desplazamientos involuntarios. Las demoliciones han afectado de forma desproporcionada a las tierras y propiedades de las minorías, sin que éstas hayan participado en el proceso de adopción de decisiones. En agosto de 2020, las fuerzas de seguridad asaltaron la aldea de Abolfazl, en la provincia de Juzestán, a raíz de una orden de demolición emitida por los tribunales. El asalto se saldó con decenas de heridos, ya que, al parecer, las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente y lanzaron botes de gas lacrimógeno contra las personas que se resistían a la confiscación y la demolición. Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 130 personas, de las cuales 60 fueron supuestamente puestas en libertad previo pago de una elevada fianza, y algunas fueron presionadas durante su reclusión para firmar un compromiso de aceptación de la demolición de sus hogares. La orden de demolición afirmaba que la propiedad pertenecía a la Fundación Mostazafan. La Fundación, clasificada como organización benéfica sin fines de lucro, está exenta de impuestos y de supervisión pública, con un valor estimado de unos 6.600 millones de dólares en 2017<sup>137</sup>. El Gobierno afirmó que se había ofrecido a los residentes un alojamiento alternativo.

66. En Sistán y Baluchistán, se destruyeron propiedades pertenecientes a la población de la zona, en su mayoría de la minoría baluchi, dejando a los residentes desplazados y sin indemnización ni refugio. Las demoliciones en el período sobre el que se informa incluyen la destrucción de una vivienda a pesar de los documentos de propiedad, la confiscación de tierras agrícolas y repetidas demoliciones en Zahedan y sus alrededores<sup>138</sup>.

67. Las demoliciones y confiscaciones de propiedades pertenecientes a la minoría religiosa bahaí se intensificaron durante el período sobre el que se informa, incluida una serie de procedimientos judiciales en los que sus propiedades fueron consideradas ilegítimas. En agosto de 2020, la sala 54 del Tribunal Especial para el Artículo 49 de la Constitución dictaminó que podían confiscarse los bienes pertenecientes a los bahaíes de la aldea de Ivel, en la provincia de Mazandarán<sup>139</sup>. En octubre de 2020, el Tribunal de Apelación de Mazandarán determinó que la propiedad de las tierras de 27 miembros de la comunidad bahaí era ilegal y permitió su confiscación y venta forzosa<sup>140</sup>. El 22 de noviembre de 2020, agentes de los servicios de inteligencia asaltaron tiendas y hogares de bahaíes en siete ciudades del país, sin previo aviso. Las órdenes de detención se basaron en acusaciones de pertenencia a “una secta perversa” y atentado contra la seguridad nacional<sup>141</sup>.

<sup>133</sup> A/HRC/46/43, párr. 17.

<sup>134</sup> Véase <https://eghtesaad24.ir/000Jwr> (en persa).

<sup>135</sup> Información recibida por el ACNUDH. Véase también [www.isna.ir/news/99082920557](http://www.isna.ir/news/99082920557) (en persa).

<sup>136</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>137</sup> Véase <https://financiatribune.com/articles/economy-domestic-economy/77642/mostazafan-foundation-puts-last-year-s-revenues-at-66b>.

<sup>138</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>139</sup> *Ibid.* Véase también <https://opa.bahai.ca/areas-focus/situation-iran-yemen/ivel/>.

<sup>140</sup> Información recibida por el ACNUDH.

<sup>141</sup> *Ibid.* Véase también [www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violations-against-bahais-says-bahai-international-community](http://www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violations-against-bahais-says-bahai-international-community).

### **III. Cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

#### **A. Órganos creados en virtud de un tratado de derechos humanos**

68. El Gobierno ha reiterado su compromiso de colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y presentar sus informes periódicos pendientes. El Secretario General señala que los informes en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenían que haberse presentado en 2013, 2014 y 2018, respectivamente. El Secretario General anima al Gobierno a presentar los informes atrasados e insta al cumplimiento de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de un tratado.

#### **B. Procedimientos especiales**

69. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 46/18, prolongó el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán. El Secretario General alienta al Gobierno a que mantenga un diálogo constructivo con el Relator Especial y lo invite a visitar el país.

70. En diciembre de 2019, el Gobierno invitó a la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y al Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos a visitar la República Islámica del Irán.

71. Entre el 1 de junio de 2020 y el 18 de enero de 2021, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales emitieron 17 comunicaciones relativas a la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán. Entre el 1 de junio de 2020 y el 18 de marzo de 2021 se emitieron un total de 15 declaraciones públicas. El Gobierno ha respondido a 12 comunicaciones. Observó sus esfuerzos por ofrecer respuestas rápidas y sustantivas a las comunicaciones.

#### **C. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

72. El Secretario General celebra el diálogo entre el Gobierno y el ACNUDH, y alienta al Gobierno a que prosiga y refuerce su colaboración con el ACNUDH en materia de cooperación técnica. La Oficina Ejecutiva del Secretario General y el ACNUDH plantearon en varias ocasiones al Gobierno su preocupación por la situación de los jóvenes infractores en riesgo inminente de ser ejecutados y por la detención de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros. El Gobierno reiteró su compromiso de seguir colaborando con el ACNUDH.

### **IV. Recomendaciones**

73. **Sobre la base del presente informe, el Secretario General:**

a) **Insta al Gobierno a que derogue la pena de muerte e introduzca una moratoria inmediata sobre su uso y a que prohíba la ejecución de delincuentes menores de edad en toda circunstancia y conmute sus penas;**

b) **Insta al Gobierno a que vele por el cumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio con las debidas garantías, en particular asegurando que todos los acusados, incluidos los acusados de delitos contra la seguridad**

nacional, tengan acceso a un abogado de su elección durante la fase de investigación preliminar y en todas las etapas posteriores de las actuaciones judiciales;

c) Insta al Gobierno a que ponga en libertad con carácter inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer de manera legítima sus derechos a la libertad de opinión, de expresión y de asociación y reunión pacíficas, y a que vele por que las medidas de seguridad en relación con futuras protestas se ajusten a las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley;

d) Insta al Gobierno a que garantice una investigación rápida, transparente y eficaz por un órgano independiente e imparcial sobre el uso de una fuerza excesiva y letal durante las protestas y sobre las muertes bajo custodia y las denuncias de tortura y otros malos tratos, y a que enjuicie y haga rendir cuentas a los funcionarios públicos, incluidos los agentes de las fuerzas del orden, que sean responsables de emitir o ejecutar las órdenes pertinentes;

e) Insta al Gobierno a que garantice el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y a que se asegure de que cualquier limitación de esos derechos, tanto en el entorno digital como fuera de él, se ajusta a los criterios establecidos en relación con las restricciones permisibles en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;

f) Insta al Gobierno a que garantice que los defensores de los derechos humanos, los abogados, los periodistas, los escritores, los activistas de los derechos laborales, los artistas y los ecologistas puedan desarrollar sus respectivas actividades con seguridad y libertad, sin temor a represalias, acoso, detención, reclusión o enjuiciamiento, y a que amplíe la política de puesta en libertad temporal de presos en el contexto de la pandemia de COVID-19 a todos los reclusos que no supongan una amenaza para la seguridad pública;

g) Insta al Gobierno a que adopte nuevas medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, a que tome medidas efectivas para protegerlas contra otras violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con las normas internacionales, y a que promueva su participación en la vida pública en condiciones de igualdad;

h) Insta al Gobierno a que proteja los derechos de todas las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, y a que haga frente de inmediato a todas las formas de discriminación contra ellas;

i) Toma nota de los problemas económicos y financieros de la República Islámica del Irán e insta a los Estados que le han impuesto sanciones a que adopten las medidas adecuadas para velar por que se dé un efecto rápido, amplio y práctico a medidas como las exenciones humanitarias, a fin de minimizar las consecuencias adversas de las sanciones;

j) Pide al Gobierno que ratifique la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares; y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo;

k) Alienta a la República Islámica del Irán a que presente los informes periódicos pendientes a los órganos creados en virtud de un tratado, y pide al Gobierno que aplique las recomendaciones de los órganos de tratados y de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales y que coopere con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán;

l) Alienta al Gobierno a que siga colaborando con el ACNUDH en el seguimiento de todas las recomendaciones recogidas en los informes del Secretario General y formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.